

Colombia

Mandaron a matar?

En Colombia, las empresas de carbón están en la picota. También suministran combustible a Alemania.

por Alexandra Endres

Los paramilitares llegaron de noche, en camionetas con vidrios polarizados. Llevaban consigo las listas con los nombres de sus víctimas. Muchos de los que fueron secuestrados en sus casas, siguen desaparecidos. Los cuerpos de otros fueron desmembrados o tirados al río. – Así describen las autoridades colombianas la situación en la provincia nororiental Cesar, a fines del milenio pasado. En aquel momento la zona del Cesar estaba controlada por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez (JAA). Sus miembros asesinaron a miles de personas, y dejaron cientos de desaparecidos.

Colombia está muy lejos de Alemania. Sin embargo, es posible que los crímenes de los paramilitares les incumban más a los consumidores alemanes de electricidad de lo que están dispuestos a aceptar. El Cesar es una de las regiones de carbón más importantes de Colombia. El carbón que se extrae aquí se vende sobre todo en Europa. También Alemania es un cliente importante. En 2011, un tercio de las importaciones de carbón alemanas, que fueron utilizados para generar electricidad, provinieron de Colombia. En gran parte, de la zona del Cesar.

Las empresas de carbón del departamento han sido acusadas durante años, de haber financiado, y apoyado por otros medios, a grupos paramilitares. Hasta el momento, no existe ningún fallo judicial que pudiese probar una participación directa. Sin embargo, en un informe publicado recientemente, hay nuevas pruebas.

Luego de muchos años de arduo trabajo, la organización holandesa de derechos humanos Pax (antes Pax Christi) recogió en un documento escrito declaraciones juradas de distintos juicios en los EE.UU. y en Colombia. Además, los colaboradores de Pax llevaron a cabo entrevistas con víctimas, victimarios y ex empleados de las empresas de carbón – y por primera vez, sistematizaron la información obtenida.

En su informe, existen fuertes referencias al hecho de que los dos mayores productores de carbón del Cesar podrían estar involucrados en las graves violaciones de derechos humanos en la región. Se trataría en primer término de una subsidiaria de la empresa familiar Drummond (EE.UU.) y de Prodeco, una rama de la firma Glencore, una multinacional suiza dedicada a la explotación de materias primas. Cerrejón, el mayor grupo carbonífero colombiano, que extrae hulla en el vecino departamento de La Guajira, no aparece nombrado en el informe. Pax no ha encontrado "ninguna evidencia que demuestre que Cerrejón haya contratado grupos armados ilegales y los haya apoyado financiera o materialmente", dice Marianne Moor, autora del nuevo estudio de Pax y experta en América Latina.

Es cierto que la violencia en el Cesar no fue creada por Drummond y Prodeco: La Guerra Civil ya existía cuando los dos grupos llegaron allí, a mediados de los años noventa. La guerrilla dominaba la zona y las empresas mineras querían preservar sus minas de carbón tanto como las vías férreas, y proteger a sus empleados de posibles ataques o secuestros. Pero al parecer no sólo se basaron en los servicios del ejército y de la policía estatal. Según el informe de Pax, los primeros paramilitares llegaron al Cesar después de que los gerentes de las empresas carboníferas tomaran contacto con los líderes de las tropas ilegales. El frente Juan Andrés Álvarez incluso habría sido fundado en 1999, a petición directa de la Drummond.

En su estudio, la organización de derechos humanos ofrece detalladas declaraciones de testigos orales que podrían demostrar que Drummond y Prodeco han remitido dinero a la JAA de forma regular. Según Pax, las dos empresas de carbón influyeron activamente en las acciones de los paramilitares: Discutían la estrategia a seguir con los líderes, y supuestamente, les dieron informaciones sobre el paradero de los presuntos "alborotadores". Los paramilitares liquidaban a gente desagradable: "Fuimos compañeros en la lucha contra la guerrilla", dice el "Tigre", un ex paramilitar de alto rango en la JAA, que ahora está encarcelado, en una cita del informe.

Las compañías niegan las acusaciones con vehemencia. Glencore aclaró que en ningún momento han tenido relación con los paramilitares, y puso en duda la credibilidad del testigo principal de la Pax. Un portavoz de Drummond, respondiendo a una solicitud periodística de DIE ZEIT, dijo que la empresa no quiere hacer comentarios sobre el tema. Sin embargo, envió un enlace que "podría ser interesante". Detrás de este enlace se escondía un artículo de la revista Forbes, que relata cómo un importante abogado opositor que trabajaba para

las víctimas, habría comprado a sus testigos. Pax, a su vez, cita testigos que dicen que la Drummond habría intentado comprar su silencio.

La batalla legal es muy dura y las acusaciones contra Drummond, en particular, tienen un gran peso. La empresa sería responsable del asesinato de tres sindicalistas en 2001. El año pasado, un proveedor del grupo ha sido condenado en el caso. Con los gerentes de la Drummond hasta ahora, no se ha podido establecer ninguna participación directa.

Los tres asesinatos son los casos más famosos en el complejo carbonífero. Pero el informe de Pax enumera muchas más violaciones de derechos humanos: otros asesinatos, más desapariciones, desplazamientos forzados. Varios testigos, según el informe, señalaron que las empresas mineras se beneficiaron de forma triple: con los desalojamientos, lograron ampliar sus concesiones, con los asesinatos, debilitaron a los sindicatos, y con la violencia, lograron acallar a las voces críticas. Si bien los paramilitares fueron desmovilizados oficialmente hace varios años, al Cesar todavía no llegó la paz.

Los sobrevivientes están traumatizados: desterrados, sin medios de subsistencia y enfermos psíquicamente. "Casi todas las víctimas tienen serios problemas para hacer frente a la vida cotidiana", dice Marianne Moor, la experta de Pax. "Muchos siguen buscando a sus muertos".

Aunque los asesinatos ocurrieron hace muchos años atrás, hasta ahora la gran mayoría de las víctimas no ha recibido ningún tipo de indemnización, critica Pax. Por tanto, la exigencia clave de los activistas por los derechos humanos a las compañías de carbón es el reconocimiento de su reponsabilidad en el caso y la indemnización de las víctimas.

A los clientes europeos de los colombianos, los proveedores de energía, les queda otra tarea por hacer: revelar las fuentes y decir a qué grupo compran su carbón - y ya no comprar a Drummond y Prodeco.

*Artículo publicado en DIE ZEIT No. 27, el 26. 06.2014.
<http://www.zeit.de/2014/27/kolumbien-kohle-bergwerk-konzern> Gracias a Claudia Palozzo por la traducción al castellano!*